



IV LEGISLATURA NÚM. 147

9 de diciembre de 1996

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE CANARIAS

SUMARIO

PROPOSICIONES DE LEY

EN TRÁMITE

PPL-4 De los Grupos Parlamentarios Coalición Canaria (CC) y Popular, sobre sedes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Página 2

PROPOSICIÓN DE LEY

EN TRÁMITE

PPL-4 De los Grupos Parlamentarios Coalición Canaria (CC) y Popular, sobre sedes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

(Registros de Entrada núms. 2.297 y 2.421, de 19/11/96 y 02/12/96, respectivamente.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 1996, adoptó el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

1.- PROPOSICIONES DE LEY

Proposición de Ley de los Grupos Parlamentarios Coalición Canaria (CC) y Popular, sobre sedes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Acuerdo:

En conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite la Proposición de Ley de referencia, a la que se acompaña Exposición de Motivos, ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y remitir al Gobierno a los efectos previstos en el artículo 124.2 del Reglamento.

De este acuerdo se dará traslado al autor de la iniciativa. Asimismo, se trasladará al Gobierno a los efectos señalados.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 5 de diciembre de 1996.- EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Los Grupos Parlamentarios de Coalición Canaria y Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 123 y ss. del Reglamento del Parlamento de Canarias presentan la Proposición de Ley adjunta.

PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Artículo tercero del Estatuto de Autonomía de Canarias formula el principio de capitalidad compartida, estableciendo a este efecto como capitales de Canarias las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

El mismo artículo establece que la sede del Presidente del Gobierno alternará entre ambas capitales por períodos legislativos, con el Vicepresidente en sede distinta a la del Presidente, por lo que los equilibrios estructurales o de distribución de sedes se presentan como principio derivado del de capitalidad compartida. Sin embargo, la *Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias* no desarrolla el principio de distribución de sedes en lo que se refiere a los diferentes órganos del Gobierno y la Administración Autónoma: Consejerías, Organismos Autónomos y demás Entes Públicos. Tampoco la *Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias* desarrolló ese principio, si bien en su artículo 27.3 dispuso que la sede de las Consejerías se determinaría según el principio de capitalidad compartida establecido en el Estatuto. De ahí que—salvo lo establecido en distintas leyes de creación de los Organismos Autónomos— no ha existido otro instrumento normativo de fijación de sedes que los Decretos aprobatorios de las Relaciones de Puestos de Trabajo, en cuanto en ellas se ordenan las unidades administrativas que sirven al desarrollo de la función política de los órganos superiores de los Departamentos, Organismos y Entes Públicos.

Esta situación requiere una norma legal cuyo objeto sea definir los criterios de distribución territorial de las sedes de los órganos del Gobierno de Canarias y su Administración Pública. Si la capitalidad compartida es el principio estatutario, es necesario que su principio derivado—el equilibrio de la distribución de sedes— se complete con criterios que no lo reduzcan por la vía de facto a una simple declaración de intenciones. A estos efectos la presente Ley desarrolla el concepto de sede; hace efectivo el principio de equilibrio entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, derivado de la capitalidad compartida; mantiene, sin perder seguridad jurídica, la necesaria flexibilidad organizativa; establece un principio de transparencia en las actuaciones del Ejecutivo que, directa o indirectamente, puedan afectar al equilibrio, en lo que se refiere a cambios estructurales o funcionales importantes; se decanta por los principios de eficacia y economía, evitan-

do duplicidades innecesarias, sin por ello olvidar la máxima proximidad de la Administración al ciudadano, distinguiendo, a estos efectos, entre los órganos de naturaleza propiamente política de los administrativos o auxiliares, cuya ubicación en distinta isla puede ser requisito necesario para la eficacia de la gestión.

Finalmente la Ley establece normas de Derecho Transitorio para, en el más breve plazo posible, permitir la adaptación a sus determinaciones de la organización actual de la Administración de la Comunidad Autónoma, sus Organismos Autónomos, Entes Públicos y empresas de titularidad autonómica.

Artículo 1.- Objeto de la Ley.

En desarrollo del Estatuto de Autonomía de Canarias la presente Ley tiene como objeto establecer los criterios para la determinación de las sedes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

Artículo 2.- Capitalidad del Archipiélago Canario.

Las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria ostentan la capitalidad compartida de la Comunidad Autónoma del Archipiélago Canario.

Artículo 3.- Sedes del Presidente y del Vicepresidente.

- 1.- La sede del Presidente del Gobierno de Canarias alternará entre ambas capitales por períodos legislativos.
- 2.- El Vicepresidente residirá en sede distinta a la del Presidente.

Artículo 4.- Sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

1.- Las sedes de las Consejerías se distribuirán entre las dos ciudades que comparten la capitalidad siguiendo el principio de equilibrio.

2.- Si el número de Consejerías fuera par, la mitad deberá tener su sede en Santa Cruz de Tenerife y la otra mitad en Las Palmas de Gran Canaria. Si el número de Consejerías fuera impar, en la capital donde en el correspondiente período legislativo resida el Presidente tendrán su sede un número de Consejerías equivalente a la mitad por defecto del total existente y el resto en la capital donde resida el Vicepresidente.

3.- Se entenderá por sede de las Consejerías la ciudad en la que se fije la oficina principal de despacho del Consejero, que será aquella en la que se ubique la Secretaría General Técnica, su Oficina Presupuestaria y demás órganos de carácter horizontal del Departamento.

4.- Las Viceconsejerías, Direcciones Generales y Centros Directivos asimilados se ubicarán en la ciudad establecida como sede de la Consejería. No obstante, cuando circunstancias objetivas de tipo organizativo lo impidan, podrán ubicarse en la otra capital.

5.- En todo caso, los Centros Directivos que tuvieran atribuidas competencias de carácter horizontal respecto a sobre otros órganos de la Administración Autónoma se ubicarán en la sede de la Consejería de la que dependen orgánicamente.

Artículo 5.- Sedes de los Organismos Autónomos y demás Entes Públicos autonómicos.

1.- En los Organismos Autónomos y Entes Públicos de la Comunidad Autónoma la sede será la que se fije en la Ley de creación e incluirá la oficina principal del Presidente o cargo asimilado, la Secretaría General, la Oficina Presupuestaria y el Órgano de Tesorería. Cuando no se fije expresamente en su norma de creación la sede se determinará reglamentariamente, atendiendo a la sede de la Consejería a la que queden adscritos.

2.- Cuando por modificaciones de la estructura del Gobierno se produzca una redistribución de sus competencias entre Consejerías diferentes, la sede de los organismos y entes públicos que se hayan establecido reglamentariamente se fijará atendiendo a la de la Consejería que vaya a desempeñar las competencias más afines a las que se les haya encomendado en sus leyes de creación.

Artículo 6.- Ubicación de otras oficinas y unidades administrativas.

Teniendo en cuenta los principios de eficacia, economía y máxima proximidad al ciudadano, la determinación reglamentaria de las sedes de las Consejerías, Organismos Autónomos y Entes Públicos autonómicos, no será óbice para el establecimiento de otras oficinas secundarias de despacho de sus órganos políticos en la otra capital o de unidades administrativas que garanticen la prestación del servicio público correspondiente. En todo caso se evitarán duplicidades que no respondan a necesidades objetivas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- 1.- En las Sociedades Públicas la sede será el domicilio social establecido en su escritura de constitución o en sus modificaciones realizadas según sus normas

estatutarias. En todo caso, ésta se adaptará a la de la Consejería a la que se adscriban por razones materiales.

2.- Por Orden del Consejero competente en materia de Hacienda, se harán públicos en el *Boletín Oficial de Canarias* los domicilios sociales de las empresas públicas de titularidad autonómica.

Segunda.- 1.- Dentro de los límites del Estatuto de Autonomía de Canarias, por Decreto del Presidente se establecerá el número y denominación de las Consejerías del Gobierno. La sede, estructura central y periférica de las mismas se determinará por Decreto del Gobierno.

2.- Las disposiciones reglamentarias que establezcan o modifiquen sedes de Consejerías, Organismos Autónomos y Entes Públicos autonómicos, serán comunicadas al Parlamento de Canarias para su debate y votación, en su caso, de propuestas de Resolución, conforme a las previsiones del Reglamento de la Cámara.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El Gobierno de Canarias, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, adaptará la distribución de las sedes de Consejerías, de los Organismos Autónomos y Entes Públicos a los principios y criterios establecidos en la misma.

Segunda.- En relación a los órganos directivos de las Consejerías distintos de las Secretarías Generales Técnicas y a los demás órganos de competencia horizontal, las medidas que hayan de adoptarse en cumplimiento de lo establecido en esta Ley se deberán completar en el plazo de un año, a través de las modificaciones pertinentes de la Relaciones de los Puestos de Trabajo, acudiendo si fuera preciso a la aprobación de Planes de Empleo de los previstos en la legislación básica de función pública.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el *Boletín Oficial de Canarias*.

